



# Asamblea General

Distr. general  
15 de julio de 2022  
Español  
Original: inglés

---

## Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 69 b) del programa provisional\*

**Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales**

### **Los planes y las políticas de respuesta y recuperación para la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde la perspectiva del derecho al desarrollo a nivel internacional**

#### **Nota del Secretario General**

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfaragi, presentado con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones [33/14](#) y [42/23](#) del Consejo de Derechos Humanos.

---

\* [A/77/150](#).



## **Informe del Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi**

### *Resumen*

En este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones [33/14](#) y [42/23](#) del Consejo, el Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi, examina la respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la recuperación de esta desde la perspectiva del derecho al desarrollo a nivel mundial, pone de relieve las buenas prácticas y analiza los retos existentes para garantizar la igualdad entre los países. El Relator Especial concluye el informe con recomendaciones sobre la integración del derecho al desarrollo en los planes y las políticas de respuesta y recuperación.

## I. Actividades del Relator Especial

1. Este informe se presenta a la Asamblea General de conformidad con lo previsto en las resoluciones [33/14](#) y [42/23](#) del Consejo de Derechos Humanos.
2. En el 51<sup>er</sup> período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi, presentará un informe temático al Consejo ([A/HRC/51/30](#)) en el que examinará los planes nacionales de respuesta y recuperación para la enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde la perspectiva del derecho al desarrollo. Además, pondrá de relieve las buenas prácticas y examinará los desafíos que se plantean para asegurar la participación significativa de los titulares de derechos dentro de los países. Por último, concluirá con recomendaciones sobre la integración del derecho al desarrollo en los planes y las políticas de recuperación de la COVID-19. El informe también contendrá un resumen de las actividades llevadas a cabo por el Relator Especial entre septiembre de 2021 y julio de 2022.

## II. Los planes y las políticas de recuperación de la COVID-19 y el derecho al desarrollo

### A. Introducción

3. En la resolución por la que se establece el mandato del Relator Especial se especifica que este debe contribuir a la promoción, la protección y la observancia del derecho al desarrollo en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de otros documentos convenidos internacionalmente en 2015, entre ellos el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París, y, a tal efecto, colaborar con los Estados Miembros y otros interesados. En 2020, la Asamblea General, en su resolución [75/182](#), párrafo 50, invitó al Relator Especial a que, junto con el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, presentara un informe sobre las actividades emprendidas en los planos nacional, regional e internacional en materia de promoción y observancia del derecho al desarrollo, teniendo en cuenta el contexto de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y la recuperación de esta. En cumplimiento de ese mandato, el Relator Especial se propone examinar en este informe la conformidad de una serie de planes y políticas de recuperación de la COVID-19 con el derecho al desarrollo a nivel internacional y regional.

4. En el presente informe, el Relator Especial amplía las directrices y recomendaciones sobre la aplicación práctica del derecho al desarrollo que presentó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019<sup>1</sup>. Esas directrices fueron el resultado de una serie de consultas mundiales llevadas a cabo en 2018 y 2019. Dichas consultas reunieron a un diverso grupo de participantes, que pusieron de relieve buenas prácticas en lo relativo al diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas que contribuyen a hacer efectivo el derecho al desarrollo. Además, el Relator Especial ha seguido examinando los retos a los que se enfrentan las partes interesadas y formulando recomendaciones prácticas sobre cómo integrar una perspectiva basada en el derecho al desarrollo en los planes y las políticas de recuperación de la COVID-19.

<sup>1</sup> [A/HRC/42/38](#).

## B. Marco normativo y de políticas

5. En el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se dispone que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. En dicha Declaración también se exponen brevemente los principios que deben guiar las decisiones en materia de políticas relacionadas con las medidas de respuesta y recuperación para la COVID-19, a saber: a) los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para hacer efectivo el derecho al desarrollo y el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos a este (art. 3, párr. 1); b) los Estados deben hacer efectivos sus derechos y cumplir con sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos (art. 3, párr. 3); c) los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena observancia del derecho al desarrollo (art. 4, párr. 1), y es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a los países en desarrollo los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global (art. 4, párr. 2); d) deben adoptarse medidas eficaces para lograr que las mujeres participen activamente en el proceso de desarrollo (art. 8, párr. 1); e) los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena observancia de todos los derechos humanos (art. 8, párr. 2); y f) deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, entre ellas la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional (art. 10).

6. El proceso de redacción de la Agenda 2030 se inspiró en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre los que se incluye el pleno respeto del derecho internacional, se basó en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos y se apoyó en otros instrumentos, como por ejemplo la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. A lo largo de la Agenda 2030 se reafirman los principios fundamentales de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo<sup>2</sup>. La Asamblea General, en su resolución [75/290](#) sobre el examen de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General [67/290](#), relativa al formato y los aspectos organizativos del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, y [70/299](#), relativa al seguimiento y el examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel mundial, recordó que la Agenda 2030 se basa en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo<sup>3</sup>. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 se refiere a la determinación de los Estados de reforzar los medios de implementación de la Agenda 2030 y de revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Las metas relacionadas con el Objetivo 17 reafirman lo dispuesto en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo al subrayar la importancia de la cooperación internacional en lo relativo a las finanzas (metas 17.1 a 17.5), la tecnología (metas 17.6 a 17.8), la creación de capacidad (meta 17.9) y el comercio (metas 17.10 a 17.12) y para abordar cuestiones sistémicas, como las finanzas, la mejora de la coherencia institucional y de las políticas y las alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros para apoyar la consecución de los Objetivos, en particular en

<sup>2</sup> Resolución [70/1](#) de la Asamblea General, párr. 10.

<sup>3</sup> Resolución [75/290](#) B, preámbulo.

los países en desarrollo, así como para los datos, el seguimiento y la rendición de cuentas (metas 17.13 a 17.19).

7. El Relator Especial considera que los planes de respuesta y recuperación para la COVID-19 son esencialmente planes de desarrollo y que, como tales, deben estar en consonancia con el derecho al desarrollo, con los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda 2030 y, sobre todo, con la promesa de no dejar a nadie atrás. El Relator Especial está convencido de que ninguna de las metas anteriormente mencionadas puede alcanzarse de una manera efectiva sin la participación informada y activa de todas las personas interesadas y de todos los pueblos y las comunidades afectados en todos los procesos y a todos los niveles de la toma de decisiones en lo relativo a la evaluación, la planificación, el seguimiento y la ejecución de los planes y las políticas de recuperación de la COVID-19.

### III. Prácticas y cooperación actuales a nivel internacional

#### A. Integración del derecho al desarrollo en los planes y las políticas de recuperación de la COVID-19: ejemplos prácticos

8. Con el fin de recabar información sobre el grado en que en los procesos de toma de decisiones relacionados con las medidas de respuesta y recuperación para la COVID-19 se ha concedido un lugar central a los titulares de derechos, el Relator Especial publicó una convocatoria para que los Estados Miembros de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los grupos de reflexión, los especialistas y los académicos pertinentes presentaran contribuciones<sup>4</sup>. Varios países facilitaron ejemplos prácticos de cómo han aprovechado la cooperación internacional para elaborar y poner en marcha planes y políticas de respuesta y recuperación para la COVID-19 y presentaron un resumen de las medidas que han adoptado para hacer frente a la pandemia a nivel mundial y regional y de los retos que se encontraron en ese sentido<sup>5</sup>. Varios agentes de la sociedad civil también aportaron ejemplos de planes y políticas de recuperación que contienen prácticas inclusivas y participativas, entre otros, desde una perspectiva de género, y expusieron a grandes rasgos numerosos retos a los que se enfrentan las partes marginadas de las sociedades, en particular en los países de ingreso bajo. También facilitaron ejemplos de desafíos derivados de las acciones de bancos multilaterales y otros agentes de desarrollo<sup>6</sup>. El Relator Especial reconoce que, como consecuencia de la pandemia, muchas partes interesadas tuvieron que reorientar sus recursos. Manifiesta su agradecimiento a todos los que han

<sup>4</sup> La convocatoria se encuentra disponible en [www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-inputs-special-rapporteur-right-development-covid-recovery-plans](http://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-inputs-special-rapporteur-right-development-covid-recovery-plans).

<sup>5</sup> Las aportaciones enviadas por los países se encuentran disponibles en [www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development](http://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development). Los siguientes países proporcionaron información sobre sus planes y políticas de recuperación de la COVID-19: Burundi (19 de abril y 25 de mayo); Costa Rica (28 de marzo); Iraq (1 de abril); Kenya (29 de marzo); Malasia (21 de abril); Mauricio (28 de marzo); México (28 de marzo); Filipinas (8 de marzo y 25 de mayo); y República Árabe Siria (2 de marzo).

<sup>6</sup> Las aportaciones enviadas por agentes de la sociedad civil se encuentran disponibles en [www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development](http://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development). Las siguientes organizaciones de la sociedad civil enviaron contribuciones en respuesta a la convocatoria publicada por el Relator Especial sobre el derecho al desarrollo: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (4 de marzo); Center for Economic and Social Rights (1 de marzo); Civil Society and Media Studies Association (28 de febrero); Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (1 de marzo); Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (1 de marzo); International Accountability Project (1 de marzo); y Equal Rights Trust (28 de febrero).

dedicado su tiempo y su trabajo a realizar contribuciones, lo que le ha permitido facilitar ejemplos que podrán adaptarse y utilizarse de aquí en adelante.

9. Muchos Estados han trabajado para recuperarse de la desaceleración económica causada por la pandemia y, al mismo tiempo, aumentar su resiliencia ante futuras crisis.

10. Según la información presentada por el Gobierno de Mauricio el 28 de marzo de 2022, el país ha contado con proyectos de infraestructura sanitaria y con donaciones de equipos médicos, materiales de protección y vacunas de varios países. También recibió inversión extranjera en infraestructura sanitaria y seguros de salud de carácter privado y logró acuerdos para la compra de vacunas con proveedores internacionales. El apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las alianzas con países amigos fueron cruciales para la respuesta nacional a la COVID-19.

11. Las Naciones Unidas, a través de la Alianza de Acción para una Economía Verde, han proporcionado apoyo técnico y financiación para el diseño de medidas nacionales de recuperación de la COVID-19. Desde junio de 2021 se han organizado talleres en línea con diversas partes interesadas, como por ejemplo representantes del público en general, propietarios de plantaciones, agroprocesadores, investigadores, académicos, exportadores y minoristas, para elaborar planes de recuperación.

12. El programa para Mauricio para el período 2017-2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), centrado en el desarrollo inclusivo y la eficacia del sector público, tiene como objetivo aportar soluciones estratégicas apropiadas para los desafíos que obstaculizan la mejora de la gestión del sector público, respaldándose la reducción de la pobreza, la inclusión social y la promoción de la igualdad de género. La Unión Europea apoya la reforma económica de Mauricio al promover la inclusión social y la energía renovable. El Programa de Cooperación Descentralizada trabajó para aumentar la capacidad del sector privado, de los agentes económicos y sociales, entre ellos los sindicatos, y de las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo proyectos que repercutan en los principales problemas de las comunidades pobres. Dicho Programa también publicó una serie de convocatorias de propuestas para los siguientes fines: financiar la participación de personas en talleres, seminarios y conferencias; financiar becas para realizar estudios o asistir a cursos de capacitación; y proyectos de microfinanciación. La Agencia Francesa de Desarrollo presta apoyo a Mauricio en los ámbitos de la infraestructura, la transmisión de energía, el turismo y la cooperación regional.

13. Según la información presentada por el Gobierno de Burundi el 19 de abril, el marco de políticas global adoptado en 2015 sigue siendo coherente, a pesar de que se han realizado modificaciones al integrarse los planes de recuperación de la COVID-19. En Burundi existe la costumbre de llevar a cabo procesos participativos en los que intervienen todos los actores estatales y no estatales, además de los asociados técnicos y financieros. A través de estos procesos participativos, el Gobierno elaboró su plan operacional de respuesta a la pandemia, en el que se abordaban cuestiones como la gestión de los casos, la prevención y el control de la infección. Se elaboraron planes de recuperación integrados financiados con asistencia oficial para el desarrollo (AOD) facilitada por los asociados internacionales y dirigidos por la OMS.

14. La pandemia se extendió rápidamente a más de 177 países de todo el mundo, lo que puso de relieve la necesidad de que todos los Estados se movilizaran conjuntamente contra esta enfermedad. En Burundi, el plan estratégico elaborado para este fin se utiliza para luchar contra la pandemia con el apoyo de los asociados técnicos y financieros. Algunos Estados tienen más medios que otros para combatir la pandemia. Puesto que la COVID-19 es una enfermedad mundial, los Estados deben apoyarse entre sí mediante la elaboración de proyectos comunes o regionales para

luchar contra ella. A través de acciones conjuntas y coordinadas, los países pueden movilizar recursos adicionales a nivel internacional. Los países desarrollados deben tomar conciencia de la necesidad de compartir sus conocimientos y de proporcionar cooperación técnica y creación de capacidades a los países menos adelantados, con el fin de promover la plena recuperación de la COVID-19.

15. En la información presentada por el Gobierno de Filipinas el 25 de mayo se indica que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Bayanihan para la Recuperación Unitaria, el Gobierno reasignó a la respuesta a la COVID-19 una parte del margen fiscal correspondiente al sector de la infraestructura. También asignó AOD para la respuesta a la pandemia, principalmente para el programa de asistencia de emergencia en efectivo y para las prestaciones del sistema sanitario a través de, entre otros, la entrega de suministros y equipos médicos, la construcción de instalaciones de aislamiento y cuarentena y el refuerzo de la capacidad de los establecimientos de salud existentes. Durante la pandemia se produjo un aumento del nivel de recursos de AOD aportados por los asociados para el desarrollo, tanto multilaterales como bilaterales. Los asociados para el desarrollo se coordinaron constantemente con el Gobierno nacional para proporcionar asistencia relacionada con la respuesta a la COVID-19 y con la recuperación de esta.

16. Los organismos de supervisión y ejecución gubernamentales nacionales adaptaron sus estrategias, procesos y políticas para abordar los nuevos problemas de ejecución derivados de la pandemia, como los retrasos en la entrega de materiales o la prestación de servicios, el despliegue de personal y los costes adicionales relacionados con las medidas sanitarias y de seguridad, así como para garantizar que la AOD siga siendo efectiva y flexible.

17. El Gobierno nacional financia sus programas y proyectos de respuesta a la COVID-19 y solicita apoyo para ellos a la comunidad internacional para el desarrollo de una manera activa. Una vez definidos los proyectos y etiquetados como prioritarios, el Gobierno facilita su tramitación y la posterior firma de los correspondientes convenios de subvención y préstamo.

18. El Gobierno nacional colabora con el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en lo relativo al programa conjunto para aprovechar el dividendo demográfico y gestionar el impacto socioeconómico de la COVID-19 mediante la aplicación de un marco nacional de financiación integrado, una iniciativa destinada a reforzar la financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la pandemia.

19. El objetivo del programa conjunto es aplicar los elementos constitutivos del marco nacional de financiación integrado, para lo cual se proporciona un apoyo catalizador al Gobierno con miras a reforzar los mecanismos ya existentes como parte de los procesos de planificación y presupuestación nacionales y para garantizar que la asignación de recursos se oriente de una manera más efectiva. También se busca establecer un marco de financiación más diversificado que pueda movilizar recursos adicionales para respaldar la consecución de los Objetivos de una forma integrada. Esto es especialmente importante en el contexto de la COVID-19, dado que en estos momentos el país corre el riesgo de retroceder significativamente con respecto a su trayectoria anterior a la pandemia, que, de haber continuado, le habría permitido avanzar según lo previsto para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

20. Un ejemplo de asistencia técnica para el país fueron los proyectos de asistencia técnica de apoyo y en materia de conocimientos del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) relacionados con la pandemia, entre los que se incluyen los siguientes: un proyecto sobre la creación de ciudades atractivas para los inversores en una región de

Asia y el Pacífico pos-COVID-19 y sobre el fomento de la competitividad y la resiliencia a través de una infraestructura de calidad, cuyo objetivo es aprovechar los recursos, los conocimientos y las alianzas del BAD para ayudar a los gobiernos locales a aumentar su capacidad técnica, financiera y de gestión con el fin de desarrollar la infraestructura municipal, mejorar la forma en que movilizan los recursos y aumentar su competitividad y resiliencia después de la COVID-19; un proyecto sobre soluciones tecnológicas educativas para las escuelas del “último tramo” en el contexto de la pandemia, cuyo fin es ayudar al departamento de educación a poner en marcha un plan de continuidad del aprendizaje para la educación básica que permita a los estudiantes seguir aprendiendo durante la pandemia a través de modalidades de aprendizaje combinado; y un proyecto centrado en fomentar la capacidad de los periodistas de los países miembros en desarrollo de Asia y el Pacífico, que prestará apoyo a los periodistas, ayudará a mejorar sus competencias técnicas y ampliará sus conocimientos sobre cuestiones de desarrollo económico y social cada vez más complejas con el fin de mejorar la calidad de sus reportajes, lograr una mayor concienciación del público y fomentar el diálogo público sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo, lo que incluye considerar la COVID-19 un problema o un reto de desarrollo para los países miembros en desarrollo e informar sobre ella como tal.

21. Según la información presentada por el Gobierno de la República Árabe Siria el 2 de marzo, las estrategias nacionales destinadas a hacer frente a la pandemia han recibido el apoyo de organismos de desarrollo, que también trabajan para fomentar las capacidades del Gobierno nacional y las autoridades locales. Se aportaron ejemplos de cooperación con la OMS, el UNICEF y el UNFPA.

22. El Gobierno prevé que la firma del documento marco estratégico para el período 2022-2024 desempeñe un papel importante en las gestiones conjuntas emprendidas para llevar a la práctica los planes de recuperación, cuyas prioridades ya se han acordado, en vista de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la estrategia nacional de desarrollo del país.

23. Según la información presentada por el Gobierno de Malasia el 21 de abril, con el fin de movilizar recursos adicionales a nivel internacional durante la pandemia, el país proporcionó ayuda humanitaria mediante el suministro de vacunas a Bangladesh, la República Democrática Popular Lao y Bosnia y Herzegovina. Además, Malasia forma parte de varias plataformas internacionales y regionales, como el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, el Commonwealth, las Naciones Unidas y bancos multilaterales de desarrollo. Malasia participa activamente en reuniones celebradas por estas organizaciones (desde el nivel de funcionarios hasta el nivel ministerial) y utiliza estas plataformas para presentar inquietudes, propuestas e ideas nacionales relacionadas con la labor incesante llevada a cabo para mitigar los impactos negativos de la pandemia.

24. Según la información presentada por el Gobierno de México el 28 de marzo de 2022, este participó en la elaboración de una guía metodológica para la recuperación socioeconómica municipal en el contexto de la COVID-19 liderada por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en la que se recogen una serie de estrategias, lecciones aprendidas y objetivos para hacer frente a los desafíos de la pandemia a través de soluciones emergentes. Dicha guía contiene una propuesta de metodología paso a paso para que los gobiernos municipales elaboren sus propios planes de recuperación socioeconómica municipal, cuya ejecución requerirá una coordinación eficiente entre los tres niveles de gobierno del país.

25. El Gobierno de México pudo participar en el Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, que es el resultado de la

cooperación internacional y que ha proporcionado vacunas que salvan vidas a más de 100 países y territorios. Otro buen ejemplo señalado por el Gobierno es la Plataforma de Recuperación Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que contiene datos subnacionales comparables a nivel internacional sobre la crisis de la COVID-19 y un compendio de soluciones en materia de políticas para respaldar la recuperación. Complementa el Panel de Información sobre la Recuperación de la COVID-19 de la OCDE, en el que se presentan indicadores sobre la recuperación a nivel nacional. El Ministerio de Economía participa en diversos foros internacionales (por ejemplo, el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá y la OCDE) en los que se ponen en común mejores prácticas y se exploran temas relacionados con la recuperación de los Estados después de la pandemia.

## **B. Repercusiones de la pandemia de COVID-19 para la observancia del derecho al desarrollo y retos internacionales**

26. El Relator Especial acoge con satisfacción los ejemplos anteriormente expuestos (párrafos 10 a 25), que ofrecen una selección de ejemplos de cooperación internacional prometedores que podrían facilitar la respuesta a la COVID-19 y la recuperación posterior a nivel mundial de conformidad con el derecho al desarrollo. El Relator Especial señala la importancia que conceden los Estados del Sur Global a la cooperación y el apoyo internacionales en los ámbitos de la salud, la recuperación económica y la protección social. Además, a través de las consultas que llevó a cabo para preparar el presente informe, el Relator Especial detectó numerosos retos que dificultan la respuesta y la recuperación desde una perspectiva regional e internacional.

27. En su *Informe sobre el desarrollo mundial 2022*, el Grupo Banco Mundial afirma que la pandemia ha desencadenado la mayor crisis económica mundial en más de un siglo, lo que ha provocado un aumento significativo de la desigualdad dentro de los países y entre ellos, observándose un impacto especialmente grave en las economías emergentes. Los estudios sugieren que más del 50 % de los hogares de economías emergentes y avanzadas no pudieron mantener el consumo básico durante más de tres meses debido a la pérdida de ingresos y, por término medio, las empresas no pudieron cubrir más de 55 días de gastos con las reservas de efectivo. La carga fue peor para los hogares y las empresas de economías emergentes que ya estaban endeudados antes de la crisis. El Grupo Banco Mundial también estima que la pobreza mundial ha aumentado por primera vez en una generación, y se han producido pérdidas de ingresos desproporcionadas entre las poblaciones desfavorecidas: en 2020, en el 70 % de los países el desempleo temporal era superior entre los trabajadores que solo habían completado la educación primaria. Puesto que las mujeres trabajan en mayor número en los sectores más afectados por los confinamientos y las medidas de distanciamiento físico, se vieron más perjudicadas por las pérdidas de ingresos y empleo. Entre las empresas, las que mayores pérdidas de ingresos sufrieron fueron las más pequeñas, las informales y aquellas con un acceso limitado al crédito formal. Además, el Grupo Banco Mundial sugiere que la recuperación de la crisis será desigual, ya que las economías emergentes y la población pobre necesitarán mucho más tiempo para recuperar los ingresos y los medios de vida perdidos a causa de la pandemia<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Véase, en particular, Grupo Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 2022: Finanzas al servicio de la recuperación equitativa*, cap. 1 (Washington, D. C., 2022).

28. Muchos Estados han trabajado para recuperarse de la desaceleración económica causada por la pandemia y, al mismo tiempo, aumentar su resiliencia ante futuras crisis y lograr resultados en materia de acción climática. En la Unión Europea, Next Generation EU es un instrumento de recuperación temporal de 750.000 millones de euros destinado a ayudar a reparar el perjuicio económico y social inmediato causado por la pandemia<sup>8</sup>. Este conjunto de incentivos requiere que los Estados miembros de la Unión Europea presenten planes nacionales de recuperación y resiliencia, que deberían promover tecnologías limpias y renovables, la eficiencia energética, el transporte sostenible y la educación y la capacitación, haciendo especial hincapié en los jóvenes y la igualdad de género. Sin embargo, en los países de ingreso bajo y bajo-medio, los presupuestos, ya de por sí muy ajustados, no permiten financiar simultáneamente todas las necesidades, por lo que han de tomarse decisiones difíciles. Los ejemplos de la región de Asia y el Pacífico ponen de relieve que el tamaño y la composición de los conjuntos de medidas fiscales adoptados en 2020 para responder a la crisis variaron significativamente<sup>9</sup>. Los países de ingreso bajo de la región han anunciado conjuntos de medidas fiscales inferiores al 2 % de su producto interno bruto (PIB). Al mismo tiempo, se prevé que, para este mismo grupo de países, los ingresos fiscales nacionales disminuyan en un 2 % del PIB<sup>10</sup>. Además, los países con unas reservas financieras de menor tamaño centraron su gasto en medidas relacionadas con la salud y dejaron poco margen fiscal para financiar otros tipos de medidas, como la protección social y el apoyo para los medios de vida de las comunidades más perjudicadas por la pandemia.

29. En un contexto de crisis económica mundial, los Gobiernos de todo el mundo están introduciendo recortes en los gastos del sector público. Los países de ingreso bajo han recurrido a contraer unos niveles de deuda cada vez más altos, con un elevado coste de endeudamiento, tanto con prestamistas privados como con países que no son miembros del Club de París<sup>11</sup>. La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico ha manifestado la preocupación de que la pandemia podría provocar una crisis de la deuda de larga duración para los países en desarrollo. El riesgo de endeudamiento lleva un decenio al alza, y la deuda pública de los mercados emergentes se ha disparado a niveles no vistos desde hace 50 años. Según las estimaciones del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2020, entre otros, se preveía que, durante el período 2020-2021, solamente los reembolsos de la deuda externa pública de los países en desarrollo alcanzarán una cifra de entre 2,6 y 3,4 billones de dólares<sup>12</sup>. También se preveía que las ratios de deuda medias para 2021 aumentaran en un 10 % del PIB en las economías de mercado emergentes y aproximadamente en un 7 % del PIB en los países de ingreso bajo<sup>13</sup>.

30. En 2021, el PNUD estudió los efectos de la COVID-19 en el desarrollo humano en diez países africanos<sup>14</sup>. El estudio arrojó las siguientes conclusiones: la COVID-19 afecta directamente a los sistemas de salud humana, modificando los patrones de

<sup>8</sup> Véase [https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu\\_en](https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en).

<sup>9</sup> Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), base de datos de seguimiento de la COVID-19 (<https://www.unescap.org/covid19>).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Centro de Investigaciones Innocenti del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), "Protecting and transforming social spending for inclusive recovery: COVID-19 and the looming debt crisis", Innocenti Policy Brief Series, núm. 2021-01 (Florencia, Italia, 2021).

<sup>12</sup> CESPAP, "An assessment of fiscal space for COVID-19 response and recovery in Asia-Pacific developing countries", MPFD Policy Briefs, núm. 116 (noviembre de 2020).

<sup>13</sup> Centro de Investigaciones Innocenti del UNICEF, "Protecting and transforming social spending for inclusive recovery: COVID-19 and the looming debt crisis".

<sup>14</sup> "Analysing long-term socio-economic impacts of COVID-19 across diverse African contexts", 2021.

mortalidad y morbilidad; los efectos directos sobre la salud se mitigan a través de políticas gubernamentales y acciones de la sociedad civil que reducen la interacción humana, de modo que se frena la propagación del virus y se salvan vidas al tiempo que se reduce la actividad económica y se modifican los patrones de producción y consumo; y los efectos económicos cambiantes se extienden por todo el sistema económico internacional, de manera que se modifican los patrones del comercio, la inversión extranjera directa, la ayuda exterior y las remesas. El PNUD concluyó que, si bien las repercusiones a corto plazo de la COVID-19 para la salud en esos diez países han sido relativamente limitadas (con la excepción de Sudáfrica), los efectos asociados a las políticas gubernamentales provocaron un deterioro del desarrollo humano. En esos diez países, la reducción del crecimiento del PIB fue de entre un -2,6 % y un -10,6 %, y se sumó al descenso de los ingresos de los hogares, a la disminución de los ingresos públicos y al aumento del 4 % del número de personas que viven en la pobreza extrema. Además, la COVID-19 redujo los flujos internacionales de comercio y remesas de ayuda, y la disminución de la inversión extranjera directa entre países fue de entre un -35,1 % y un -72,5 %. También se observaron descensos de las exportaciones, siendo las economías insulares las que sufrieron la mayor disminución del comercio internacional. En el estudio, el PNUD advierte de que la desaceleración económica impulsará un aumento de la mortalidad indirecta, que mide el número de personas que morirán en 2030 no como consecuencia directa de la COVID-19, sino por enfermedades transmisibles prevenibles derivadas de un acceso muy limitado a alimentos, agua limpia y saneamiento y a los ingresos. A largo plazo, la mayor carga de mortalidad indirecta recaerá sobre los países que antes de la COVID-19 tenían unos niveles de capacidad gubernamental bajos y una escasa inversión gubernamental en los sistemas de salud.

31. En su estudio, el PNUD también concluyó que la desaceleración económica causada por la pandemia será relativamente prolongada en todos los países, ya que se prevén reducciones del PIB hasta 2030 y 2050. Los países con mayores niveles de capacidad gubernamental y una menor dependencia de la agricultura experimentarán una recuperación más vigorosa. Sin embargo, aquellos con una menor capacidad gubernamental y una mayor proporción de la población activa dedicada al sector agrícola registrarán un deterioro económico continuado hasta 2040 y 2050. Los efectos a largo plazo de la COVID-19 multiplicarán los retos en materia de desarrollo a los que se enfrentan estos países.

32. En un estudio reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso de relieve algunos de los retos generados por la pandemia en la región<sup>15</sup>. Si bien la CEPAL constató que en la región el comercio internacional se recuperó rápidamente, subrayó que la dependencia de la región del turismo, que es superior a la media mundial, provocó incertidumbre sobre las perspectivas de futuro de varias economías, especialmente en el Caribe. También concluyó que la pandemia afectó en mayor medida a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas que exportan al mercado regional. En su estudio, la CEPAL también analizó el desafío que supone la autosuficiencia productiva de la industria sanitaria de la región. Observó que la mayoría de las exportaciones de dicha industria se destinan a países desarrollados, con la excepción de los medicamentos exportados a la India y los dispositivos médicos exportados a China. El porcentaje de las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos realizadas entre 2018 y 2020 correspondiente a América Latina y el Caribe fue del 1,1 %. Paralelamente, el valor de las importaciones a la región de 2020 fue casi cinco veces superior al de sus exportaciones y prácticamente todos los países de la región tienen déficits

<sup>15</sup> La información facilitada en este párrafo procede del informe *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2021: en busca de una recuperación resiliente y sostenible* (publicación de las Naciones Unidas, 2021).

comerciales en el sector, lo que se debe a la fuerte dependencia de los suministros extrarregionales de medicamentos patentados con patentes vigentes y de principios activos para la fabricación de medicamentos genéricos. Además, el porcentaje de las patentes farmacéuticas concedidas en todo el mundo correspondiente a la región es inferior al 1 %.

33. En otro estudio de la CEPAL se examinaron los efectos negativos de la pandemia en el medio ambiente de la región<sup>16</sup>. Dicho estudio demostró que, aunque los confinamientos y los cierres de establecimientos industriales y comerciales provocaron mejoras localizadas en la calidad del aire y reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero durante 2020, las mejoras fueron temporales y se disiparon al reanudarse las actividades económicas. En la región, las medidas de recuperación centradas en mantener el consumo o en compensar su descenso han debilitado los servicios públicos no relacionados con la salud, el seguimiento territorial y las funciones de seguimiento social y de los poderes públicos. Los recortes en el gasto público y el debilitamiento de la vigilancia han provocado un aumento de las actividades ilegales, como por ejemplo la deforestación en las fronteras naturales. Las reducciones de las emisiones no alcanzaron los niveles exigidos en el Acuerdo de París, y los recursos utilizados y los sectores favorecidos durante la pandemia no son acordes a las promesas y declaraciones realizadas sobre la adopción de unas políticas medioambientales explícitas más ambiciosas.

## 1. Financiación de la respuesta y la recuperación y medidas de austeridad

34. Aunque la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo no incluye expresamente una lista de las prioridades financieras que permitirán hacer efectivo el derecho al desarrollo, sí expone a grandes rasgos los principios que deben guiar las decisiones en materia de políticas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en la Declaración se apela a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho al desarrollo y a garantizar la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda y el empleo (art. 8). Además, en el plano internacional, los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente, tanto para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo como para eliminar los obstáculos al desarrollo global (arts. 3, párr. 3, y 4, párr. 2). Estos principios también resultan aplicables a las políticas mundiales destinadas a facilitar la recuperación de la pandemia de COVID-19.

35. Desde el comienzo de la pandemia, el Grupo Banco Mundial ha desembolsado miles de millones de dólares para respaldar las medidas de respuesta y recuperación. Entre abril de 2020 y marzo de 2021, comprometió más de 200.000 millones de dólares a clientes de los sectores público y privado para la lucha contra los efectos de la pandemia. También facilitó 20.000 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo a financiar la adquisición y la distribución de vacunas contra la COVID-19, colaboró con el Mecanismo COVAX para la puesta en marcha de un instrumento de financiación que permitirá al Mecanismo realizar compras anticipadas de vacunas y respaldó la iniciativa del Equipo de Tareas Africano de Adquisición de Vacunas destinada a ayudar a los países a adquirir y distribuir vacunas para hasta 400 millones de personas<sup>17</sup>.

36. El Grupo Banco Mundial anunció que su respuesta a la crisis se centra en cuatro áreas principales<sup>18</sup>. En primer lugar, se centra en salvar vidas al brindar ayuda a los

<sup>16</sup> “Cómo financiar el desarrollo sostenible: recuperación de los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe”, Informe Especial de la serie COVID-19, núm. 13, 27 de enero de 2022.

<sup>17</sup> Véase <https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-helping-countries-with-covid-19-coronavirus>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

países para que detengan la transmisión, presten servicios de salud, garanticen el acceso de los hogares vulnerables a la atención médica y mejoren la disposición operativa para futuras pandemias. El Grupo Banco Mundial cuenta con programas de vacunación aprobados por un monto superior a 9.000 millones de dólares para más de 75 países. En segundo lugar, la respuesta se centra en proteger a las personas pobres y vulnerables mediante la prestación de apoyo a los ingresos y a la oferta de alimentos para los más vulnerables y de apoyo al empleo para los hogares más pobres, las empresas informales y las microempresas. En tercer lugar, se centra en garantizar el desarrollo empresarial y la creación de empleo sostenibles mediante la prestación de asesoramiento sobre políticas y asistencia financiera a las empresas e instituciones financieras, con el fin de ayudar a preservar los puestos de trabajo y garantizar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, puedan superar la crisis y volver a crecer. En cuarto lugar, se centra en fortalecer las políticas, las instituciones y las inversiones. El Grupo Banco Mundial colabora estrechamente con el FMI para ayudar a los países a administrar mejor la deuda pública, a llevar a cabo reformas clave en la gestión financiera y a detectar oportunidades de crecimiento ecológico y desarrollo con bajas emisiones de carbono a medida que sus economías se recuperan.

37. No cabe duda de que las acciones anteriormente descritas respondieron a unas necesidades urgentes y críticas. Sin embargo, durante el proceso de consulta llevado a cabo para la elaboración del presente informe, las organizaciones de la sociedad civil comunicaron al Relator Especial una serie de inquietudes relacionadas con las políticas subyacentes a la respuesta del Grupo Banco Mundial. Muchos de los proyectos se propusieron como parte de una modalidad de desembolso de vía rápida, lo que en la práctica significó que los proyectos se propusieron y aprobaron con unos tiempos de preparación más cortos y con limitaciones sustanciales en lo relativo a las consultas a las partes interesadas<sup>19</sup>. La pandemia acentuó los obstáculos que dificultan el acceso de las comunidades a la información sobre los proyectos y procesos de desarrollo y su participación en ellos, ya que se impusieron restricciones al desplazamiento de las comunidades y al derecho a reunirse y a ser consultadas de forma significativa y se permitieron represiones con el pretexto de la respuesta a la pandemia<sup>20</sup>. El Relator Especial ya ha hecho hincapié en el principio de que las comunidades afectadas siempre deben sentirse propietarias de las agendas, los presupuestos y los procesos de desarrollo<sup>21</sup>. Ha recomendado que los bancos de desarrollo celebren consultas significativas para asegurarse de que los proyectos que financian promueven las prioridades de desarrollo de los beneficiarios previstos y que los bancos garanticen el acceso a la información sobre los proyectos financiados antes de que estos sean autorizados<sup>22</sup>.

38. También se planteó la preocupación de que, en algunos casos, la respuesta de emergencia inicial del Grupo Banco Mundial ha proporcionado un punto de partida para aumentar el alcance de las reformas estructurales, especialmente las vinculadas a un papel más sustancial del sector privado en la financiación para el desarrollo, en consonancia con el enfoque del Grupo Banco Mundial sobre la financiación para el desarrollo, resumido en el marco de maximización de la financiación para el desarrollo<sup>23,24</sup>. Aunque existe un amplio margen para la financiación privada en las

<sup>19</sup> Véase <https://accountability.medium.com/what-weve-learned-by-tracking-covid-19-relief-financing-for-two-years-1e5e77a4b0be>.

<sup>20</sup> *Ibid.* Véase también Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, ARTICLE 19 e IFEX, “Unhealthy silence: development banks' inaction on retaliation during COVID-19” (julio de 2021).

<sup>21</sup> Véase A/HRC/42/38, párr. 15.

<sup>22</sup> Véase A/HRC/42/38, párr. 50.

<sup>23</sup> Véase la información presentada por la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, disponible en [www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development](http://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development).

<sup>24</sup> Grupo Banco Mundial, “Maximizing Finance for Development (MFD)”. Disponible en

agendas de desarrollo, el Relator Especial ya ha planteado la cuestión de cuál sería el uso apropiado de la financiación privada frente a la pública<sup>25</sup>. En su opinión, la financiación privada no es apropiada para todas las necesidades de financiación y hay que prestar más atención a cómo se gestionan los riesgos de la financiación privada. Ha recomendado que los resultados en materia de desarrollo de las alianzas público-privadas promovidas mediante préstamos, proyectos y otros acuerdos de financiación en las que participen bancos multilaterales de desarrollo e instituciones de financiación del desarrollo deberían ser sometidos a exámenes independientes, incluido un examen minucioso de los efectos de estas alianzas en los derechos humanos y el medio ambiente<sup>26</sup>. Esta recomendación es igualmente válida para los proyectos de respuesta y recuperación para la COVID-19.

39. El FMI proporcionó asistencia financiera y alivio del servicio de la deuda a los países miembros que se enfrentaban a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Actualmente tiene aproximadamente 250.000 millones de dólares a disposición de los países miembros<sup>27</sup>. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022, en el contexto de la pandemia, el FMI se centró en los siguientes cursos de actuación<sup>28</sup>:

a) En primer lugar, duplicó temporalmente el acceso a sus servicios de emergencia (esto es, el Servicio de Crédito Rápido y el Instrumento de Financiamiento Rápido), lo que le permitió responder al aumento de la demanda de asistencia financiera por parte de los países miembros producido durante la crisis. A través de estos servicios, el FMI puede proporcionar ayuda de emergencia sin necesidad de que exista un programa completo. El Directorio Ejecutivo del FMI ha aprobado financiación de emergencia para 80 países.

b) En segundo lugar, a través del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes, el FMI amplió el alivio del servicio de la deuda a 29 de sus países miembros más pobres y vulnerables para el período comprendido entre abril de 2020 y mediados de octubre de 2021. Este alivio de la deuda ayudó a los países beneficiarios a destinar una mayor cantidad de sus recursos financieros a actividades médicas de emergencia y otras medidas de alivio esenciales.

c) En tercer lugar, el 25 de marzo de 2020, la Directora Gerente del FMI y el Presidente del Grupo Banco Mundial pidieron a los acreedores bilaterales que suspendieran los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres. El Grupo de los 20 respondió a esta petición el 15 de abril al suspender los reembolsos de crédito bilateral oficial de los países más pobres hasta finales de 2020.

d) En cuarto lugar, el FMI ha aprobado el establecimiento de una línea de liquidez a corto plazo para apuntalar la red de seguridad financiera mundial.

e) En quinto lugar, el FMI amplió los programas de préstamo existentes a fin de atender las nuevas y urgentes necesidades derivadas de la COVID-19, lo que permitió canalizar los recursos existentes hacia el gasto en suministros y equipos médicos necesarios y hacia la contención del brote.

f) En sexto lugar, puesto que el FMI realiza un seguimiento de la evolución económica y del impacto de la pandemia a nivel mundial, regional y nacional,

---

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/168331522826993264/pdf/124888-REVISED-BRI-PUBLIC-Maximizing-Finance.pdf>.

<sup>25</sup> Véase A/75/167, párr. 53.

<sup>26</sup> *Ibid.*, párr. 62.

<sup>27</sup> Véase [www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker](http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker).

<sup>28</sup> La información facilitada en este párrafo se basa en el siguiente sitio web: [www.imf.org/es/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q1](http://www.imf.org/es/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q1).

recomienda las políticas necesarias para superar la crisis, proteger a los más vulnerables y sentar las bases para la recuperación económica.

g) Por último, el FMI proporciona asesoramiento sobre políticas y desarrollo de capacidades a más de 160 países con el fin de abordar cuestiones urgentes, como la gestión del efectivo, la supervisión financiera, la ciberseguridad y la gobernanza económica.

40. Durante las consultas previas a la elaboración del presente informe, casi todas las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil consultadas por el Relator Especial o que presentaron contribuciones escritas señalaron la carga de la deuda soberana como un reto importante a la hora de movilizar recursos para responder a la pandemia<sup>29</sup>. Para dar respuesta a la carga de la deuda de los países del Sur Global, que reduce considerablemente el margen fiscal de que disponen para financiar su recuperación e invertir en la observancia de derechos fundamentales, como la atención sanitaria, la educación, la vivienda y la seguridad social, es necesario intensificar la cooperación internacional<sup>30</sup>. Para muchos países, las moratorias y la reestructuración de la deuda podrían resultar insuficientes<sup>31</sup>.

41. En su informe de 2020 sobre la financiación para el desarrollo, el Relator Especial subrayó que la inducción a la austeridad económica supone una gran dificultad para las políticas de financiación pública. Este tipo de medidas suelen entrañar los siguientes elementos: la eliminación o la reducción de los subsidios, entre otros, al combustible, a la agricultura y a los productos alimenticios; recortes y límites máximos para los salarios del sector público, sobre todo para los salarios de los trabajadores de los sectores de la educación y la salud y otros sectores públicos, que constituyen una gran parte del gasto público en sueldos de los países en desarrollo; la racionalización de las redes de seguridad social, los programas de seguros, las pensiones, las prestaciones para vivienda, las prestaciones por hijos a cargo y las prestaciones de discapacidad y la aplicación de mayores recortes en esas esferas; y la ampliación de los impuestos al consumo, como el impuesto sobre el valor añadido, de productos básicos que se consumen de una manera muy superior en los hogares pobres<sup>32</sup>.

42. Durante las consultas llevadas a cabo para la elaboración del presente informe, varias organizaciones de la sociedad civil<sup>33</sup> manifestaron su preocupación por las repercusiones negativas de las medidas de austeridad para la recuperación. En el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia, y por consejo del FMI, algunos Gobiernos han recurrido a adoptar medidas de austeridad<sup>34</sup>. Como parte de los acuerdos de préstamo, el FMI ha propuesto medidas como la reducción y la congelación del gasto en sueldos, el aumento o la introducción de impuestos sobre el

<sup>29</sup> Véanse las contribuciones del Center for Economic and Social Rights, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo y el International Accountability Project. Disponibles en [www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development](http://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development).

<sup>30</sup> Véase la contribución del Center for Economic and Social Rights. Disponible en [www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development](http://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-development).

<sup>31</sup> *Ibid.* Según el Center for Economic and Social Rights, la cancelación de todos los pagos de deuda externa pública a prestamistas bilaterales, multilaterales y privados con vencimiento en 2020, incluyéndose el capital principal, los intereses y las comisiones, liberaría aproximadamente 25.500 millones de dólares para los países de ingreso bajo.

<sup>32</sup> Véase A/75/167, párr. 39.

<sup>33</sup> Véanse las contribuciones del Center for Economic and Social Rights, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, el International Accountability Project y el Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

<sup>34</sup> Oxfam Internacional, “Adding fuel to fire: how IMF demands for austerity will drive up inequality worldwide”, documento informativo de Oxfam (agosto de 2021).

valor añadido y recortes del gasto público general<sup>35</sup>. Entre 2021 y 2023, 80 países aplicarán medidas de austeridad por un valor medio del 3,8 % del PIB<sup>36</sup>.

43. El Relator Especial señala que la imposición de medidas de austeridad limita aún más la capacidad de los Gobiernos para atender las necesidades de los ciudadanos en materia de atención sanitaria, agua y saneamiento, protección social, empleo y vivienda, que constituyen derechos económicos y sociales fundamentales<sup>37</sup>. En sus informes, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas y el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, han subrayado repetidamente el papel de la protección social para amortiguar el impacto de la crisis económica, en particular para las mujeres<sup>38</sup>.

## 2. Acceso desigual a las vacunas, los medicamentos, las tecnologías sanitarias, los diagnósticos y las terapias de salud y cooperación internacional

44. Una de las cuestiones que puso de manifiesto las desigualdades entre países y la necesidad de una mayor cooperación y solidaridad a nivel internacional es el acceso desigual a las vacunas, los medicamentos, las tecnologías sanitarias, los diagnósticos y las terapias de salud para la COVID-19. Este acceso desigual perjudica al derecho al desarrollo en la medida en que obstaculiza la capacidad de los individuos y las comunidades para participar en el desarrollo político, económico, social y cultural. Las bajas tasas de vacunación han provocado altas tasas de hospitalización y un elevado número de muertes, se han introducido medidas que restringen la circulación de personas y mercancías, lo que ha perjudicado a la vida económica, social y cultural, y las restricciones a la libertad de reunión han tenido un impacto negativo en la participación en la vida política, por nombrar solo algunas consecuencias del acceso desigual a las vacunas.

45. La situación es especialmente grave para los habitantes de Estados del Sur Global, donde se encuentran la mayoría de los países de ingreso bajo y medio-bajo. A fecha de 29 de junio, solo el 17,4 % de los habitantes de países de ingreso bajo habían recibido al menos una dosis de vacuna<sup>39</sup>. Sin embargo, en mayo más del 76 % de la población de los países de la OCDE tenía la pauta de vacunación completa, y en 15 de esos países la tasa de vacunación superaba el 75 %<sup>40</sup>. Según el PNUD, el reparto desigual del suministro mundial de vacunas obstaculiza el progreso de la vacunación en los países de ingreso bajo: en enero, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía y Nigeria aún no habían recibido suficiente suministro para vacunar al 10 % de su población<sup>41</sup>. Además, la limitada capacidad de distribución de que disponen los países de ingreso bajo supone una dificultad adicional para las labores de vacunación<sup>42</sup>. Los datos indican que, una vez contabilizadas las vacunas desperdiciadas, el coste medio por dosis de la vacuna contra la COVID-19 es de entre 2 y 40 dólares y el coste estimado de administración es de 3,70 dólares por persona vacunada con dos dosis<sup>43</sup>. Estos costes suponen una importante carga financiera para los países de ingreso bajo, donde el gasto sanitario medio anual per cápita es de 39

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Véase la información presentada por la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo.

<sup>37</sup> Véase Center for Women's Global Leadership de la Universidad de Rutgers, "A COVID-19 feminist recovery plan to achieve substantive gender equality" (junio de 2021).

<sup>38</sup> [A/HRC/26/39](#) y [A/73/179](#).

<sup>39</sup> Véase <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>.

<sup>40</sup> Véase [www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard](http://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard).

<sup>41</sup> Véase <https://data.undp.org/vaccine-equity-archive/vaccine-equity-and-speed/>.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

dólares<sup>44</sup>. La mayoría de los países con un gasto sanitario bajo se encuentran en Asia Meridional y en África Subsahariana<sup>45</sup>. Además, la rápida aparición de nuevas variantes de la COVID-19 ha generado la necesidad de suministrar dosis de refuerzo de la vacuna, por lo que es probable que los costes de vacunación sean un gasto recurrente en un futuro inmediato<sup>46</sup>.

46. En abril de 2020 se creó el Mecanismo COVAX en respuesta a la clara necesidad de dar acceso a las vacunas a todas las personas del mundo, como parte de una labor verdaderamente mundial para responder a la pandemia<sup>47</sup>. Esta iniciativa está codirigida por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias, la Alianza Gavi y la OMS. Los asociados para la ejecución son el UNICEF y el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo del Mecanismo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Está previsto que, a través del Mecanismo, 190 países participantes obtengan un acceso equitativo a las vacunas. Utilizando un marco de asignación diseñado por la OMS y un mecanismo de reparto de riesgos mundial para la adquisición conjunta, el Mecanismo tiene como objetivo lograr la vacunación del 20 % de la población de todos los países.

47. En enero de 2022, la OMS, el UNICEF y la Alianza Gavi establecieron la Alianza para la Distribución de Vacunas contra la COVID-19 con el fin de respaldar la distribución de vacunas a 92 países. Con el objetivo de aumentar las tasas de vacunación, la Alianza facilita apoyo operativo a los 34 países que en enero de 2022 tenían una cobertura vacunal igual o inferior al 10 %. Si bien estas iniciativas son sumamente valiosas, la OMS considera que para derrotar realmente a la pandemia se requiere una cobertura mucho mayor en todos los países<sup>48</sup>. Además, las naciones ricas eludieron en gran medida el Mecanismo COVAX al adquirir vacunas para sus propias poblaciones<sup>49</sup>.

48. Otro problema relacionado con las campañas de vacunación es la capacidad (o la incapacidad) de los sistemas sanitarios nacionales para distribuir las vacunas de forma equitativa, de acuerdo con los derechos a la vida, la salud, los beneficios del progreso científico y la igualdad sustantiva. Sin unas medidas de cooperación internacional más amplias que permitan movilizar una financiación adecuada, muchos sistemas sanitarios del Sur Global no podrán garantizar la disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios de salud ni asegurar que estos sean accesibles, aceptables y de buena calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

49. El análisis del PNUD<sup>50</sup> sugiere que la recuperación económica será más rápida en los países con tasas de vacunación más altas y mucho más lenta en los países de ingreso bajo donde las tasas de vacunación van a la zaga. Según el análisis, si la tasa de vacunación hubiera sido igual a la de los países de ingreso alto (54,3 %), en 2021

<sup>44</sup> Véase Organización Mundial de la Salud (OMS), *Global Expenditure on Health: Public Spending on the Rise?* (Ginebra, 2021), pág. 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Véase <https://data.undp.org/vaccine-equity/>.

<sup>47</sup> Véase <https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax>.

<sup>48</sup> OMS, “Achieving 70% COVID-19 immunization coverage by mid-2022”, declaración del Grupo Independiente sobre la Asignación de las Vacunas del Mecanismo COVAX, 23 de diciembre de 2021; y Naciones Unidas, “70% vaccination target must be met to ward off Omicron: WHO”, Noticias ONU, 4 de enero de 2022.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> “Impact of vaccine inequity on economic recovery”, plataforma Data Futures del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (febrero de 2022).

el PIB de los países de ingreso bajo habría aumentado en 16.270 millones de dólares, lo que supone un incremento de 5,16 puntos porcentuales<sup>51</sup>.

50. Con el fin de permitir una mayor producción de tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y generar más oportunidades para la difusión a una franja más amplia de la población mundial a un coste más asequible, en octubre de 2020 la India y Sudáfrica presentaron una propuesta formal, patrocinada por 65 Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para establecer una exención temporal de determinadas protecciones previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)<sup>52</sup> “en relación con la prevención, contención o tratamiento de la COVID-19”, entre otras cosas, reconociendo “la necesidad de un acceso sin trabas y oportuno a productos médicos asequibles, incluidos equipos de diagnóstico, vacunas, medicamentos, equipo de protección personal y respiradores, para responder de manera rápida y eficaz a la pandemia de COVID-19”<sup>53</sup>. La gran mayoría de los Estados del Sur Global apoyaron la propuesta.

51. El 17 de junio de 2022, la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio adoptó una decisión ministerial relativa al Acuerdo sobre los ADPIC (WT/MIN(22)/W/15/Rev.2). En ella, la Conferencia tomó nota de las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19 y decidió que los países podían limitar los derechos previstos en el artículo 28, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC autorizando el uso, sin el consentimiento del titular de los derechos, de la materia de una patente requerida para la producción y el suministro de vacunas contra la COVID-19 en la medida necesaria para hacer frente a la pandemia (párr. 1) y podría autorizar el uso de la materia de una patente en virtud del artículo 31 sin el consentimiento del titular de los derechos mediante cualquier instrumento disponible en la legislación (párr. 2). Mientras que la propuesta inicial de exención del Acuerdo sobre los ADPIC incluía la exención de restricciones relacionadas con productos y tecnologías sanitarios, como las vacunas, los diagnósticos, las terapias, los dispositivos médicos, los equipos de protección personal, sus materiales o componentes y sus métodos y medios de fabricación, la decisión adoptada se limita a las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Se ha manifestado inquietud por el hecho de que el alcance limitado de la decisión y las condiciones impuestas a su posible uso hacen que no se trate de una verdadera respuesta a la propuesta de exención<sup>54</sup>. Además, aunque el proceso de negociación duró aproximadamente 20 meses, se plantearon inquietudes debido a que el proceso llevado a cabo para adoptar la decisión no permitió la participación plena e informada de los representantes de los países en desarrollo<sup>55</sup>.

52. Se ha argumentado que limitar los derechos de propiedad intelectual pondrá en peligro la innovación. Sin embargo, en el párrafo 17 de la Declaración Ministerial de Doha se afirma claramente que los derechos de propiedad intelectual deben aplicarse e interpretarse de forma que apoyen la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la creación de nuevas tecnologías. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución [46/14](#), titulada “Asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a

<sup>51</sup> *Ibid.* Por ejemplo, se calcula que si el 40 % de la población de la República Democrática del Congo hubiera estado vacunada en septiembre de 2021, el aumento previsto del PIB del país podría haber cubierto el 75 % de su gasto sanitario actual, y en Etiopía, con esa tasa de vacunación, se podrían haber cubierto tres veces todos los pagos de intereses de la deuda pública.

<sup>52</sup> Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1867, núm. 31874.

<sup>53</sup> Organización Mundial del Comercio, documento IP/C/W/669.

<sup>54</sup> Véase Centro del Sur, “Trips waiver: an insufficient multilateral response. Trips-consistent national actions are called for”, declaración de 21 de junio de 2022.

<sup>55</sup> *Ibid.*

las vacunas para hacer frente a la pandemia”, en la que reafirmó que el acceso a las vacunas es un derecho humano protegido y reconoció la desigual asignación y distribución de vacunas entre los países<sup>56</sup>. El Consejo instó a todos los Estados a que, individual y colectivamente, eliminaran “los obstáculos injustificados que restringen la exportación de las vacunas contra la COVID-19”<sup>57</sup>, facilitaran “el comercio, la adquisición y la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y el acceso a ellas”<sup>58</sup> para todos y se abstuvieran “de adoptar medidas económicas, financieras o comerciales que puedan afectar negativamente al acceso equitativo, asequible, justo, oportuno y universal a las vacunas contra la COVID-19, en particular en los países en desarrollo”<sup>59</sup>. También pidió un mayor “acceso en materia de ciencia, innovación, tecnologías, asistencia técnica e intercambio de conocimientos”<sup>60</sup>, solicitó a todas las partes interesadas que se comprometieran “a actuar con transparencia en todos los asuntos relacionados con la producción, distribución y fijación de precios justos de las vacunas” e instó a los Estados a adoptar “medidas de inmediato para evitar la especulación y los controles indebidos a la exportación y la acumulación de existencias que puedan obstaculizar el acceso asequible, oportuno, equitativo y universal de todos los países a las vacunas contra la COVID-19”<sup>61</sup>. El preámbulo de la resolución contiene una referencia explícita a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y a la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

#### IV. Conclusiones y recomendaciones

**53. El impacto devastador de la pandemia en todas las categorías de derechos humanos está ampliamente documentado<sup>62</sup>. El Relator Especial expresa su profunda preocupación por los efectos mundiales de la pandemia de COVID-19 y ha pedido a los Estados que, en su respuesta a la crisis, no dejen a nadie atrás. La participación es un componente clave del derecho al desarrollo, especialmente la de quienes están expuestos a un riesgo alto de vulnerabilidad. Esto se aplica tanto a nivel nacional como mundial.**

**54. El Secretario General ha pedido un nuevo contrato social entre los Gobiernos, las personas, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras internacionales y otras partes interesadas clave con el fin de garantizar el empleo, el desarrollo sostenible, la cobertura sanitaria universal y la protección social, tomando como base la igualdad de derechos y oportunidades para todos<sup>63</sup>.**

**55. Para hacer frente a la mayor crisis de salud pública del siglo XXI, la comunidad internacional debe diseñar y poner en práctica políticas y medidas ambiciosas y exhaustivas. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París deben ejecutarse de acuerdo con el marco universal de los derechos humanos para garantizar una rápida recuperación que no se limite a restablecer el *statu quo* anterior a la pandemia, sino que haga avanzar los objetivos de desarrollo y acción climática para todas las personas y para el planeta. Los Estados deben cooperar en un**

<sup>56</sup> Véase la resolución 46/14 del Consejo de Derechos Humanos, preámbulo.

<sup>57</sup> *Ibid.*, párr. 6.

<sup>58</sup> *Ibid.*, párr. 7.

<sup>59</sup> *Ibid.*, párr. 16.

<sup>60</sup> *Ibid.*, párr. 9.

<sup>61</sup> *Ibid.*, párr. 14.

<sup>62</sup> Véase, por ejemplo: A/HRC/47/31, secciones II.A y II.B; A/HRC/50/40, sección III; A/HRC/48/53; A/HRC/48/54; A/HRC/47/29; A/HRC/47/35; A/HRC/46/19; y A/HRC/46/34.

<sup>63</sup> A/75/1, párr. 21.

espíritu de multilateralismo fortalecido y renovado, entre otros, como parte de los procesos y mecanismos de las Naciones Unidas.

56. El Relator Especial recomienda que en la cooperación y la coordinación internacionales entre Estados se tengan en cuenta las obligaciones extraterritoriales, es decir, las obligaciones de los Gobiernos que van más allá de las fronteras de sus Estados, como principio de derechos humanos fundamental a la hora de adoptar soluciones transfronterizas en el contexto de la pandemia.

57. Los Estados deberían garantizar que en el proceso de negociación de los acuerdos internacionales, entre los que se incluyen los acuerdos comerciales internacionales, participen de manera significativa todas las partes interesadas. Los países en desarrollo deberían estar mejor integrados en el sistema de comercio mundial, para lo que será necesario reforzar la capacidad de los representantes estatales y no estatales que participan en los procesos de negociación. La información sobre las próximas iniciativas debería estar disponible a nivel nacional en una fase temprana, de modo que la sociedad civil y las comunidades afectadas puedan participar en los procesos de negociación multilateral <sup>64</sup>. Los Estados deberían promover el aumento del comercio intrarregional, velando al mismo tiempo por que los acuerdos comerciales regionales se evalúen en función de sus repercusiones para los derechos humanos y el medio ambiente.

58. Los Estados deberían promover el establecimiento de un mecanismo internacional de renegociación de la deuda. El Relator Especial insta a los Estados a apoyar la emisión de derechos especiales de giro por parte del FMI para las naciones del Sur Global con el fin de liberar recursos sumamente necesarios para las acciones de respuesta y recuperación.

59. Los Gobiernos y las organizaciones internacionales que financian programas de desarrollo no deberían imponer condicionalidades a los Gobiernos beneficiarios, ya que hacerlo podría tener efectos adversos no deseados en la población, en particular si las condicionalidades debilitan los sistemas de salud y bienestar social y las políticas de desarrollo humano.

60. En cuanto a la cooperación internacional en cuestiones fiscales, el Relator Especial reitera su recomendación (véase [A/75/167](#), párr. 66) de establecer una comisión fiscal de las Naciones Unidas de carácter inclusivo e intergubernamental dotada del mandato y los recursos necesarios para garantizar la cooperación con miras a fomentar la movilización de recursos nacionales. Dicha comisión debería ocuparse también de todas las cuestiones relacionadas con los flujos financieros ilícitos, entre los que se incluyen la evasión y la elusión de impuestos. La composición universal, que implica que todos los países participarían en pie de igualdad, podría facilitar la reparación de políticas y prácticas fiscales perjudiciales y la eliminación de paraísos fiscales, territorios con opacidad financiera y otros elementos que facilitan los flujos financieros ilícitos.

61. El Relator Especial reitera su recomendación de que, al responder a los efectos económicos de la pandemia, los Estados discernan cuidadosamente el uso apropiado de la financiación privada frente a la pública, ya que la financiación privada podría no ser apropiada para todas las necesidades de financiación. Es necesario gestionar mejor los riesgos de la financiación privada, especialmente en lo que respecta al sector público y a los costos de los pasivos contingentes en las cuentas oficiales del Estado (véase [A/75/167](#), párr. 70).

<sup>64</sup> Véase [A/HRC/42/38](#), párr. 41.

62. El Relator Especial también reitera su recomendación de que los asociados para el desarrollo deberían renovar su compromiso con el objetivo de dedicar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la AOD, para lo cual se han de proporcionar calendarios y marcos de rendición de cuentas, entre otras formas, mediante la promulgación de leyes de ámbito nacional. Los asociados para el desarrollo también deberían redirigir la ayuda a donde más se necesite con medidas y plazos claros, proporcionando el 50 % de la AOD a los países menos adelantados (véase [A/75/167](#), párr. 61).

63. Con el fin de garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de toda la gama de derechos humanos, los planes y las políticas destinados a respaldar la recuperación económica deberían contemplar el desarrollo sostenible y la neutralidad en carbono y contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y a los objetivos del Acuerdo de París. Las políticas de respuesta y recuperación para la COVID-19 deberían acelerar la transición hacia economías de emisiones cero, o por lo menos no obstaculizarla.

64. El Relator Especial reitera sus recomendaciones de que las instituciones monetarias internacionales y los Estados eviten las medidas de austeridad y las opciones de gasto público que reviertan los avances en materia de protección social universal y de suministro o prestación de bienes y servicios públicos y que únicamente adopten ese tipo de medidas cuando se hayan agotado todas las opciones de financiación alternativas. Los bancos de desarrollo no deberían imponer condiciones a los Estados que les obliguen a tomar medidas perjudiciales para su propio desarrollo, como el ajuste de la infraestructura fiscal o la imposición de medidas de austeridad<sup>65</sup>.

65. A nivel mundial, los Estados y las instituciones monetarias internacionales deben adoptar las siguientes medidas: garantizar una mayor coordinación de las políticas económicas, entre las que se incluyen las políticas monetarias, de modo que la recuperación de un grupo de países no se produzca a costa de otro; proporcionar apoyo internacional a través de préstamos y subvenciones, especialmente para los numerosos países menos adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo y países de ingreso medio que se han visto más afectados por la crisis; y reforzar la cooperación internacional con miras a ampliar las iniciativas de alivio y sostenibilidad de la deuda para los países en desarrollo, de conformidad con los compromisos pertinentes contenidos en la Agenda 2030 y en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

66. En lo que respecta al acceso a las vacunas contra la COVID-19, los Estados deben seguir apoyando un enfoque mundial correctamente coordinado para su desarrollo y distribución, a fin de garantizar el acceso de todos los pueblos de una manera no discriminatoria. Los Estados deberían cooperar plenamente con el Mecanismo COVAX y la Alianza para la Distribución de Vacunas contra la COVID-19 y contribuir a ellos para garantizar que, como mínimo, estas iniciativas cumplan sus objetivos.

67. En línea con su obligación en materia de cooperación internacional y con el fin de responder a emergencias de salud pública de carácter mundial, los miembros de la OMC deberían: continuar las negociaciones para ampliar la exención del Acuerdo sobre los ADPIC de modo que no solo cubra las patentes relacionadas con las vacunas contra la COVID-19, sino también las restricciones relacionadas con los productos y las tecnologías sanitarios, como los diagnósticos, las terapias, los dispositivos médicos, los equipos de protección personal, sus

<sup>65</sup> Véase [A/HRC/42/38](#), párrs. 62 y 91.

**materiales o componentes y sus métodos y medios de fabricación; hacer un mayor uso de las excepciones previstas en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC para permitir la fabricación y exportación de este tipo de productos; y revisar el actual régimen internacional de propiedad intelectual (especialmente el artículo 31 bis del anexo del Acuerdo sobre los ADPIC) para acelerar el intercambio de tecnología y conocimientos técnicos.**

**68. Los países de ingreso alto deberían intensificar la prestación de asistencia a los países del Sur Global, en particular para los países menos adelantados, con el fin de que sus sistemas de salud puedan proporcionar establecimientos, bienes y servicios de salud accesibles, aceptables y de buena calidad para todos.**

---